

Ecuador en Paro: cronología, causas y efectos económicos

Desde el 22 de septiembre de 2025, Ecuador atraviesa un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Conaie, con la participación de algunos transportistas, de agricultores, comunidades rurales, estudiantes y otros sectores sociales.

Aunque la chispa del conflicto fue la eliminación del subsidio al diésel que subió el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón, las demandas van más allá: rechazo a políticas extractivistas, observancia a derechos ambientales, afectación al transporte rural y condiciones históricas de inequidad en varias regiones del país.

Desarrollo del conflicto: causas, cronología y actores

El gobierno de Daniel Noboa justificó la medida por su carga fiscal: se estimaba que los subsidios a combustibles costaban anualmente unos 1.100 millones de dólares, cerca del 1 % del PIB, y que además el referido subsidio estaba siendo aprovechado por grupos a quienes no pretendía beneficiar, principalmente a contrabandistas que comercializaban el combustible hacia Perú y Colombia, países donde no hay tal subsidio

La magnitud del aumento (de 1,80 a 2,80 por galón) resultó en principio un golpe fuerte para quienes dependen del combustible para su subsistencia, especialmente transportistas rurales y agricultores. Cabe anotar no obstante que el Gobierno ha diseñado un sistema de compensaciones dirigidas a quienes afectaría este aumento de precio, y son: transportistas de pasajeros con permisos habilitantes en regla, transporte comercial, agricultores y pescadores

Se separa cuales han sido las demandas de los grupos que se manifiestan en contra del gobierno y la respuesta de este:

1. Demandas sociales estructurales

Las movilizaciones también recogen reclamos en contra de proyectos mineros, preocupaciones ambientales por el uso del agua, extractivismo y falta de participación ciudadana en decisiones con impacto local.

La Conaie había convocado una asamblea extraordinaria en Riobamba para decidir acciones.

2. Déficit fiscal y presión externa

El gobierno argumenta que no puede seguir sosteniendo subsidios desproporcionados, especialmente en un contexto de deuda, obligaciones internacionales y necesidades de financiamiento.

Adicionalmente, se ha hecho énfasis en una circunstancia: que el subsidio no es un derecho permanente y ha sido históricamente mal utilizado, ya que este tipo de políticas fiscales deben servir para dar apoyo temporal en momentos de crisis o para apoyar a poblaciones vulnerables.



Ha destacado que los subsidios a combustibles terminan filtrándose hacia quienes menos los necesitan:

- 1. Contrabando a Perú y Colombia, donde el combustible es más caro, porque se transa a precios internacionales. Es un negocio ilegal rentable: se compra barato en Ecuador y se revende en frontera con amplia ganancia.
- 2. Economías ilegales, como minería aurífera ilegal y narcotráfico, que dependen de grandes volúmenes de combustible para maquinaria, dragas y transporte de droga.
- 3. Usuarios de alto poder adquisitivo, por ejemplo, propietarios de vehículos de uso privado y flotas que no necesitan subsidio, pero lo aprovechan.

Todos estos argumentos comprueban que la medida no ha sido progresiva, ha generado beneficios a sectores que no lo necesitan y que el gasto que realiza el Gobierno podría enfocarse de manera más adecuada.

Cronología y evolución

Se inició desde el 15 al 18 de septiembre, donde se mostró el malestar social. El anuncio presidencial surte efecto y Conaie evalúa convocatoria a paro. El 18 de septiembre en Riobamba, la Conaie acuerda iniciar paro nacional inmediato e indefinido y se lo inició el 22 de septiembre con bloqueos en vías de la Sierra.

Cuatro días después las pérdidas acumuladas ya superaron los 20 millones de dólares en la Sierra centro y norte con un impacto severo al sector florícola, con pérdidas estimadas en un millón de dólares diarios.

El presidente de Expo Flores, Alejandro Martínez, indicó que la paralización impide que la producción salga hacia mercados internacionales; incluso algunas flores que no logran embarcarse deben ir a compostaje, generando pérdida directa, también denunció actos violentos en fincas (robos, intimidaciones) y cobros ilegales a transportistas para permitir paso en ciertas rutas.

Además, los bloqueos y los retrasos logísticos elevan costos operativos, con camiones que llegan con hasta 6 horas de demora y luego deben esperar más en el aeropuerto.

El gobierno declaró el estado de excepción en seis provincias y se trasladó temporalmente la sede del poder ejecutivo a la ciudad de Latacunga, con el objetivo de tener mayor operatividad. Lamentablemente las manifestaciones han venido acompañadas de violencia y ataques contra la propiedad pública y privada.

<u>Impacto económico del paro</u>

El paro no es solamente un fenómeno social o político; tiene implicaciones profundas para la economía ecuatoriana, tanto a nivel inmediato como de mediano plazo.

En solo cuatro días, las pérdidas en la Sierra centro y norte superaron los 20 millones de dólares. El sector florícola, ya golpeado por afectaciones en logística y exportación interrumpida, registra pérdidas acumuladas de 7 millones de dólares en siete días de paro.



En Imbabura, gasolineras han dejado de operar, con pérdidas estimadas entre USD 200.000 y 300.000 diarios ya que los bloqueos por parte de los manifestantes no permiten recibir tanqueros y surtir combustible.

A esto se le debe sumar el impacto del resto de actividades económicas de estas provincias como los sectores alimenticio, textil (sector que ya está golpeado desde los apagones de 2024) debido al cierre obligado de locales comerciales, ferias y mercados, turístico (sector hotelero, restaurantes y otros), valores aún no cuantificados.

Se reportan incidentes de presuntos asaltos a fincas por parte de los manifestantes, para obligar trabajadores a sumarse al paro, lo que agrava pérdidas agrarias y conflictos sociales.

El país ya ha visto afectaciones por las movilizaciones sociales: el paro nacional de junio de 2022 dejó pérdidas por USD 1.115,4 millones en 18 días, así como el de 2019 que generó igualmente pérdidas por más de USD 800 millones.

Organizaciones empresariales estiman que cada día de paralización podría generar pérdidas de hasta USD 50 millones, considerando efectos en logística, comercio, producción y empleo.

Indicadores macro y percepción financiera

A pesar de lo indicado, durante los primeros dos días de protesta, el riesgo país de Ecuador cayó de 821 a 710 puntos, una reducción de 111 puntos, lo que fue interpretado como una señal de confianza de los mercados ante una gestión firme del ejecutivo, que no cedió a la presión de la Conaie, cuyos argumentos carecen de fundamento al momento que rechazan la subida del precio del diésel, confundiendo este hecho con otras demandas.

Cabe indicar que el riesgo país es una medida de percepción de los mercados internacionales relacionada con la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones, por lo que la posición firme del gobierno acerca del retiro del subsidio muestra hacia el exterior un escenario de mejora de la posición fiscal.

Es relevante mencionar que en más de un medio de comunicación se ha hablado de una posible emisión de deuda del país en mercados de valores internacionales, esto partiendo del hecho que esta medida se siga reduciendo. Adicionalmente, es clave la relación con los organismos multilaterales que son quienes además ven con buenos ojos el proceso de consolidación fiscal y que son quienes además ya han actuado como garantes de una emisión soberana y podrían volver a hacerlo en el futuro.

La tendencia del riesgo país sin embargo es frágil: si el paro se prolonga o se torna más conflictivo, la percepción internacional podría revertirse, afectando la inversión y el posible escenario de emisión de bonos soberanos.

Efectos colaterales que inciden en la economía



Interrupción en logística y transporte, dado que los bloqueos impiden el flujo normal de carga, elevan costos de transporte y retrasan entregas de materias primas y productos terminados.

Cadenas de suministro afectadas debido a que las industrias dependientes de insumos locales se quedan sin abastecimiento.

De otro lado, varios sectores presumen que al aumento del precio del diésel generaría una presión en los precios por el hecho que el encarecimiento del combustible y los costos logísticos se transmiten al precio final de alimentos y bienes de consumo, sin embargo su análisis es incompleto dado que el combustible no es el único costo asociado a un producto, por lo que el impacto nunca será directo, el aumento de USD1 en el galón no implica el aumento del mismo monto en el producto final; por esto es sumamente necesario el control de la especulación. Considérese que el precio del diésel en Ecuador aún es de los más bajos de la región.

Se genera por otro lado desconfianza empresarial y en las inversiones dado que las empresas locales y extranjeras pueden posponer o cancelar inversiones frente al riesgo político-social creciente.

Pérdida de recaudación fiscal debido a que una menor actividad económica significa menos recaudación de impuestos (IVA, ventas) en los sectores afectados.

Daño reputacional y de confianza internacional, la generación de pérdidas en el sector florícola y las denuncias de actos violentos generan una percepción negativa del país, esto podría intensificarse si las protestas escalan.

Perspectivas, desafíos y escenarios probables

Negociación y acuerdo parcial

Si el gobierno se abre al diálogo, ofrece compensaciones adicionales o revierte parcialmente algunas medidas, podría contener la escalada del conflicto y mitigar pérdidas, lo que requeriría credibilidad, respaldo territorial y garantías de cumplimiento. La Conaie sin embargo ha mencionado que por su lado no está abierta al diálogo y ha presentado un pliego de demandas, por lo que algunos actores ya están ofreciéndose como mediadores, entre ellos la Iglesia.

Extensión del paro y radicalización

Si el paro se prolonga, el daño económico será más profundo, borrando una racha interesante de recuperación que traía la economía desde el segundo trimestre del año. En ese caso, la caída del riesgo país podría revertirse, se podrían ver salidas de capitales y golpe al clima de inversión.

Control institucional

Si el gobierno opta por medidas más duras (intervención territorial, fuertes mecanismos de control), existe riesgo de escalamiento violento, denuncias de derechos humanos y desgaste institucional.



El desafío inmediato que tiene el Ecuador es encontrar vías de diálogo y acuerdos que mitiguen la crisis sin renunciar a la viabilidad fiscal. Pero el reto estructural es más profundo: la ecuación entre desarrollo, equidad, legitimidad institucional y sostenibilidad económica necesita una recomposición real para que Ecuador rompa este ciclo de protestas y crisis.